Gobierno del CHACO | Asesoría General de Gobierno

lms

DICTAMEN N° 415

REF: E18-2026-4171-AE "PEREZ, MAURO DANIEL C/ PROVINCIA DEL CHACO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA", Expte 547/25

DE: ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO
PROVINCIA DEL CHACO
AB. FEDERICO VALDES

A: DIRECCIÓN DE CONTRALOR Y NORMATIZACIÓN
PROVINCIA DEL CHACO
DR. FRANCO VILLAFAÑE

De mi consideración:

Ingresa la actuación electrónica de referencia a ésta Asesoría General de Gobierno, a efectos de emitir opinión respecto al proyecto de Decreto agregado en e-parte 8, por el que se propicia el cumplimiento de la Resolución N° 357/26 de fecha 10/06/2026, en autos caratulados: **"PEREZ, MAURO DANIEL C/ PROVINCIA DEL CHACO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA", EXPTE 547/25** del registro de la Sala I de la Cámara Contenciosa Administrativa la que resolvió: *"I.APROBAR la liquidación de intereses por el diferimiento en el pago de la suma condenada en autos en la suma de pesos setecientos veinte mil ochocientos sesenta y dos con sesenta y siete centavos ($ 720.862,67), con fecha de corte al 27/04/26, en todo cuanto hubiere lugar por derecho. Debiendo estarse a lo dispuesto por el art. 770 del Código Civil y Comercial, y al límite que impone a la capitalización de intereses".* -

Al respecto, cabe recordar que es doctrina de este organismo asesor -en consonancia con el criterio sostenido por la Procuración del Tesoro de la Nación-, que nuestra opinión debe ser vertida en último lugar en el procedimiento administrativo, a fin de evitar –entre otras cosas- que se convierta en una asesoría jurídica más, supliendo el cometido específico de sus delegaciones [1].-

En el caso de marras, la cuestión sometida a consulta, si bien no proviene de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo, los organismos y reparticiones que lo integran conforme lo determina el artículo 12 de la Ley N° 2108-A, no obstante, cuenta con el aval de la máxima autoridad ministerial. -

I. **Antecedentes:** Del análisis de la presente, surge que se inician con la intervención de la Fiscalía de Estado (e-parte 1), por la que requiere se arbitren los medios para el cumplimiento de la Resolución judicial obrante en e-parte 2.-

En relación a la medida proyectada, luce agregada intervención de la Asesoría Jurídica Jurisdiccional, e-parte 14.-

[1] (v. Dictámenes 205:106; 242:328, 504; 243:486)

lms

Además de ello ha intervenido la Dirección General de Recursos Humanos (e-parte 7) no habiendo formulando observaciones al proyecto de Decreto.-

Se advierte a su vez que no obra intervención de la Dirección de Finanzas y Programación Presupuestaria, la que deberá ser agregada previo a la suscripción del presente proyecto.-

En e-parte 8, se agrega proyecto de decreto, que no se encuentra firmado digitalmente por el MINISTRO DE GOBIERNO, aún así, examinado, se ajusta a una adecuada técnica legislativa. -

II- Análisis de la Medida: Debe tenerse presente que, por la medida bajo análisis, se propicia el cumplimiento de la Resolución N° 357/26 de fecha 10/06/2026, en autos caratulados: **"PEREZ, MAURO DANIEL C/ PROVINCIA DEL CHACO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA", EXPTE 547/25** del registro de la Sala I de la Cámara Contenciosa Administrativa la que resolvió*: "I. APROBAR la liquidación de intereses por el diferimiento en el pago de la suma condenada en autos en la suma de pesos setecientos veinte mil ochocientos sesenta y dos con sesenta y siete centavos ($ 720.862,67), con fecha de corte al 27/04/26, en todo cuanto hubiere lugar por derecho. Debiendo estarse a lo dispuesto por el art. 770 del Código Civil y Comercial, y al límite que impone a la capitalización de intereses".-*

Es así que a la Asesoría General de Gobierno no le compete abrir juicio sobre el fondo de la cuestión, dado que las causas judiciales se encuentran reservadas en forma exclusiva y excluyente al Poder Judicial, los restantes poderes del Estado deben evitar verter apreciaciones que hagan a las decisiones de aquellas[2].

La Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho que "*el **cumplimiento de una decisión judicial es incuestionable y en nuestra tradición jurídica tiene el carácter de dogma, máxime cuando el que debe cumplirla es el propio Estado -persona ética por naturaleza- que es el que debe empezar por dar el ejemplo.** Respecto al debido acatamiento de las órdenes judiciales al que están sujetos los funcionarios administrativos, el principio cardinal en la materia es que las decisiones judiciales deben cumplimentarse, máxime cuando involucran órdenes dirigidas a otro funcionario del Estado cuya colaboración es presupuesto de la organización estatal."*[3]-

Sin perjuicio de lo expuesto, y en lo que respecta al contenido del proyecto de decreto (e-parte N° 8), esta Asesoría General estima que el mismo se ajusta a una adecuada técnica legislativa, sin embargo esta instancia propone realizar las siguientes modificaciones.-

---

[2] Dict. N° 152/99, 19 de octubre de 1999. Expte. N° 375879/99. Presidencia de la Nación. (Dictámenes 231:89).

3 PTN Dict. N° 187/99, 16 de noviembre de 1999. Expte. N° 1192/99. Secretaría de Comunicaciones. (Dictámenes 231:218).

- En lo que respecta a los CONSIDERANDOS, particularmente el último párrafo, deberá suprimirse. Asimismo, deberá incorporarse al nuevo último párrafo, la mención sobre la intervención de esta Asesoría General de Gobierno. –

- En la parte Dispositiva, se sugiere modificar la redacción de los artículos 2° y 3°, quedando los mismos redactados de la siguiente manera:

"Artículo 2°: Reconócese, en los términos de la Resolución Judicial, al Sr. Pérez Mauro Daniel, DNI N° 36.017.879 la suma de pesos setecientos veinte mil ochocientos sesenta y dos con sesenta y siete centavos ($720.862,67), correspondiente a planilla de intereses aprobada en la Resolución Judicial con fecha de corte al 27/04/26".-

"Artículo 3°: Autorizase a la Unidad de Recursos Humanos a liquidar y a la Dirección de Administración, ambas instancias administrativas dependientes del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, a abonar al agente Pérez Mauro Daniel, DNI N° 36.017.879, la suma indicada en el Artículo 2° del presente, en un todo de acuerdo a la Resolución Judicial".-

Cabe precisar que recae bajo la exclusiva responsabilidad de la jurisdicción de origen verificar la integridad y suficiencia de las intervenciones técnicas obrantes en las actuaciones. Asimismo, corresponde a dicha instancia la incorporación de aquellos informes o dictámenes que estime conducentes en ejercicio de sus atribuciones y del control de legalidad y legitimidad que le es propio.

Ello, en función del principio de la desconcentración administrativa – modalidad de organización administrativa imperante que rige a la Administración Central- determinando la existencia de distintas carteras Ministeriales y Secretarias de estado, con sus propias estructuras jerárquicas funcionales y competenciales. Debiendo y resultando cada una de ellas responsables, de la optimización de sus recursos y procedimientos, en un marco de economía, celeridad, eficiencia y eficacia de debe primar en la Gestión Pública.

Máxime cuando la medida a adoptarse implique (directa o indirectamente) un impacto económico y presupuestario, siendo responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción y entidad del Sector Público Provincial la implantación de un eficiente y eficaz sistema propio de control de legalidad, financiero y de gestión sobre sus operaciones, compatibles con las normas constitucionales y legales vigentes al respecto (art.2 inc.f pto.2 y conc. de la ley 1092-A).

Al respecto, en el ámbito nacional se ha dicho: "La competencia de la Procuración del Tesoro de la Nación se limita a los aspectos estrictamente jurídicos de los temas que se someten a su consulta y, en consecuencia, no se expide sobre cuestiones técnicas, económicas o de oportunidad, mérito o conveniencia, ni tampoco sobre la equidad o inequidad de las fórmulas contractuales (conf. Dict. 231:36; 241:312).

III. Conclusión: Que, analizados los antecedentes obrantes en autos, esta Asesoría General de Gobierno considera que el proyecto de decreto analizado, con las modificaciones propuestas por esta instancia, da cumplimiento a lo

lms

resuelto por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativa de la ciudad de Resistencia, mediante Resolución Judicial N° 357/26 de fecha 10/06/2026, en autos caratulados: **"PEREZ, MAURO DANIEL C/ PROVINCIA DEL CHACO S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA", EXPTE 547/25.**

Que, con la emisión del presente dictamen, esta Asesoría General de Gobierno ha cesado su intervención en las presentes actuaciones, debiendo estarse a las observaciones y consideraciones precedentemente formuladas.

Finalmente, es dable señalar el carácter no vinculante de los dictámenes emitidos por esta instancia en virtud del art. 13 de la Ley N° 2108-A, que dispone: "Los dictámenes, vistas, informes legales u opiniones jurídicas que emita la Asesoría General de Gobierno, no son vinculantes para la repartición u organismo requirente...".

Por todo lo cual, con las observaciones realizadas se remite a sus efectos.

Dese preferente despacho atento la existencia de plazos procesales en curso.

Atentamente.

ASESORIA GENERAL DE GOBIERNO

Ab. FEDERICO VALDÉS
Asesor General de Gobierno
PROVINCIA DEL CHACO

13 JUL. 2026